

JUNIO 2026

contraste

global

ANÁLISIS ESTRATÉGICO TRIMESTRAL

POLÍTICA NACIONAL | ECONOMÍA | SEGURIDAD | INTERNACIONAL

LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE KAST

Tomás Arias | Juan Pablo Cruz | Luis Eduardo Escobar | Daniel Grimaldi | Natalia Silva

Chile21



Executive summary

The first quarter of José Antonio Kast's administration (March–June 2026) reveals a government that chose speed over consolidation, accepting early political costs in pursuit of an accelerated transformation of the State model. The result is a significant gap between the ambition of the official narrative and the consistency of actual governance. On the political front, the government successfully activated the emergency narrative that had driven its campaign but failed to translate it into stable governance. The National Reconstruction Bill advanced through the Chamber of Deputies with a circumstantial majority but faces a more uncertain path in the Senate. The early departure of two key ministers as Sedini at SEGEOB and Steinert at Security, exposed deep structural imbalances in cabinet design, while presidential approval fell 17 points between March and May before partially recovering after the reshuffle. The opposition, for its part, consolidated legislative obstruction as its dominant strategy without offering an agenda of its own, contributing to a mutual blockade whose cost is borne by the political system as a whole.

On the economic front, the quarter's indicators contradict the expectations with which markets greeted the new government. GDP contracted 0.5% compared to the same period in 2025, unemployment reached 9.1% its highest level in five years, and CEPAL projects annual growth of no more than 2%, well below the 4% promised during the campaign. The elimination of the fuel price stabilization mechanism (Mepco) passed the external commodity shock directly to the domestic market, fueling inflation and eroding household purchasing power. The Autonomous Fiscal Council warned that the National Reconstruction Plan will generate fiscal deficits at least through 2031, at an estimated annual cost of US\$1.8 billion once fully implemented, with 79.1% of its tax benefits concentrated in the top 1% of earners. On security, the quarter was marked by institutional conflicts, reversed budget cuts, and the absence of a formal plan acknowledged by the outgoing minister herself. The period's most significant achievements like Operation Tokyo and the historic drug seizure in Arica are attributable to the accumulated institutional strengthening of the Public Prosecutor's Office and the police, an institutional architecture that transcends any given administration.

On foreign policy, the government consolidated a realignment with the West that has narrowed Chile's room for maneuver in an international scenario where China remains an unavoidable strategic partner. The withdrawal of support for Michelle Bachelet's UN Secretary-General candidacy broke a longstanding cross-party convention on foreign policy, while the handling of the submarine cable dispute with China left the country in an uncomfortable position vis-à-vis both major powers. Ideological alignment with Washington produced no favorable treatment on tariffs - Trump proposed a 12.5% increase on Chilean imports in early June- and the rapprochement with Israel generated unprecedented diplomatic tensions following the detention of Chilean citizens on humanitarian missions. The quarter closes with three open questions that will define the administration's trajectory: whether the government can modify its legislative strategy ahead of the Senate; whether the opposition can move beyond obstruction; and whether the sustained decline in approval will produce any genuine adjustment in presidential governing style.

Resumen ejecutivo

El primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast (marzo-junio de 2026) revela una administración que eligió la velocidad sobre la consolidación, asumiendo costos políticos tempranos en la búsqueda de una transformación acelerada del modelo de Estado. El resultado es una brecha significativa entre la ambición del relato oficial y la consistencia de la gestión efectiva. En política, el gobierno instaló con éxito la narrativa de emergencia que movilizó su campaña, pero no logró traducirla en gobernabilidad estable. La Ley de Reconstrucción Nacional avanzó en la Cámara con una mayoría circunstancial, pero su tramitación en el Senado enfrenta un escenario más incierto. La salida prematura de dos ministras clave como Sedini en SEGEGOB y Steinert en Seguridad, reveló desequilibrios profundos en el diseño del gabinete, mientras la aprobación presidencial cayó 17 puntos entre marzo y mayo antes de recuperar terreno parcialmente tras el cambio de gabinete. La oposición, por su parte, consolidó la obstrucción legislativa como su estrategia dominante sin ofrecer una agenda propia, contribuyendo a un bloqueo mutuo cuyo costo lo paga el sistema político en su conjunto.

En economía, los indicadores del trimestre contradicen las expectativas con que el mercado recibió al nuevo gobierno. El PIB retrocedió 0,5% respecto al mismo período de 2025, el desempleo alcanzó el 9,1%, su nivel más alto en cinco años y la Cepal proyecta un crecimiento anual que no supera el 2%, muy por debajo del 4% prometido en campaña. La eliminación del Mepco trasladó el shock de los combustibles al mercado interno, presionando la inflación y erosionando el poder adquisitivo de los hogares. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el Plan de Reconstrucción Nacional generará déficits fiscales al menos hasta 2031, con un costo estimado de US\$1.800 millones anuales en régimen, concentrando el 79,1% de sus beneficios tributarios en el 1% de contribuyentes de mayores ingresos. En seguridad, el trimestre estuvo marcado por conflictos institucionales, recortes presupuestarios revertidos y la ausencia de un plan formal reconocida por la propia ministra saliente. Los logros más significativos del período -la Operación Tokio y el decomiso histórico en Arica- son atribuibles al fortalecimiento acumulado de la Fiscalía y las policías, institucionalidad que trasciende los gobiernos de turno.

En política exterior, el gobierno consolidó un realineamiento con Occidente que redujo el margen de maniobra de Chile en un escenario internacional donde China sigue siendo un socio estratégico insoslayable. El retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU rompió una convención histórica de política de Estado, mientras la gestión del cable submarino con China dejó al país en una posición incómoda frente a ambas potencias. El alineamiento ideológico con Washington no produjo trato diferenciado favorable en materia arancelaria, y el respaldo a Israel generó tensiones diplomáticas inéditas tras la captura de ciudadanos chilenos en misiones humanitarias. El trimestre cierra con tres preguntas abiertas que definirán la trayectoria de la administración: si el gobierno es capaz de modificar su estrategia legislativa de cara al Senado; si la oposición logra trascender la obstrucción; y si la caída sostenida de aprobación produce algún ajuste real en el estilo de conducción presidencial.

Política Nacional

Hechos destacados:

- Marzo estuvo marcado por las fricciones de un cambio de mando presidencial que reflejó la polarización de la sociedad chilena. Mientras Boric se retiraba dejando atrás un legado inconcluso, Kast se instaló copando la agenda para preparar el terreno de su reforma miscelánea o megarreforma¹.
- Abril marcó el inicio de las resistencias a la reforma miscelánea y al estilo tecnocrático del nuevo gobierno. La oposición establece su estrategia de bloqueo legislativo y los roces al interior del oficialismo se hacen evidentes².
- En medio de una creciente desaprobación pública, el gobierno de Kast logra aprobar en la Cámara la Ley de Reconstrucción en el Congreso que pasó al Senado durante mayo, sobrepasando el “tsunami” de indicaciones que la oposición hizo al proyecto³.
- Problemas de comunicación y diseño político del gobierno implicaron la prematura salida de dos ministras clave como Mara Sedini en SEGEGOB y Trinidad Steinert en Seguridad⁴.
- El 1 de junio el Presidente Kast realiza su primera cuenta pública, destacando tres ejes: recuperar la seguridad y el orden público, impulsar la reconstrucción del país y, reactivación económica y empleo⁵.
- En junio más de 1500 deudores del Crédito con Aval del Estado CAE sufrieron embargos en sus cuentas corrientes por parte de la Tesorería General de la República⁶.
- Boric interviene en la agenda política nacional con una crítica hacia al gobierno por preferir endurecer la mano con las familias y seguir negándose a levantar el secreto bancario para luchas contra el crimen organizado⁷.

1 Bío Bío, 11 de marzo del 2026. CIPER, 25 de marzo del 2026. Emol, 29 de marzo de 2026.

2 t13, 5 de abril del 2026. Publimetro, 6 de abril del 2026. t13, 7 de abril del 2026. El Dínamo, 8 de abril del 2026. Radio Uchile, 10 de abril del 2026. t13, 13 de abril del 2026. Bío Bío, 14 de abril del 2026. Gobierno de Chile, 17 de abril del 2026. El Mostrador, 24 de abril del 2026. Emol, 01 de mayo del 2026.

3 . T13, 7 de mayo del 2026

4 El País, 3 de mayo del 2026. Bío Bío, 8 de mayo del 2026. El Mostrador, 17 de mayo del 2026. La Tercera, 18 de mayo del 2026. Diario Financiero, 19 de mayo del 2026. La Tercera, 20 de mayo del 2026.

5 EL País, 1 de junio del 2026

6 EMOL, 8 de junio del 2026

7 El País, Chile, 8 de junio del 2026

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

Análisis:

Marzo estuvo marcado por las fricciones propias de un cambio de mando que reflejó, desde el primer momento, la polarización de la sociedad chilena. Mientras Boric se retiraba dejando un legado inconcluso, Kast copó la agenda instalando la narrativa que guiaría su administración: la de un gobierno de emergencia convocado a reconstruir un país en ruinas. Abril marcó el inicio de las primeras resistencias a la denominada Ley de Reconstrucción y al estilo tecnocrático del nuevo equipo, con la oposición consolidando su estrategia de bloqueo legislativo y las primeras tensiones haciéndose visibles al interior del oficialismo. En mayo, en medio de una aprobación en caída sostenida, el gobierno logró aprobar el proyecto en la Cámara pese al gran volumen de indicaciones de la oposición, pero pagó un costo político significativo: la salida prematura de dos ministras clave, Mara Sedini en SEGEGOB y Trinidad Steinert en Seguridad, reveló desequilibrios profundos en el diseño del gabinete.

El horizonte restaurador y su instrumento

La instalación del gobierno de José Antonio Kast estuvo guiada por la narrativa de emergencia que movilizó con éxito durante su campaña. Su diagnóstico económico y social apunta a restaurar y refundar un orden social percibido como perdido, aunque ahora fortalecido con valores conservadores. Ese es, en el fondo, el rol político del relato de emergencia. No es un gobierno de derecha tradicional sino de una "derecha sin complejos", una administración que busca desplazar el centro de gravedad de la política chilena hacia un modelo que prioriza al gran capital sobre la cohesión social, recuperando una lógica económica de los años ochenta que el consenso político post-transición había moderado.

El contraste entre el discurso triunfal de diciembre con su llamado a la unidad y al diálogo y la práctica gubernamental fue notorio desde el primer día. Al asumir el mando en marzo, Kast evocó la figura de Diego Portales siguiendo la misma lectura que Jaime Guzmán y Pinochet habían hecho de ese legado, priorizando el orden por sobre la democracia. Esta apelación a una "autoridad portaliana" del siglo XIX ignora la complejidad de la sociedad actual y la desconfianza estructural que caracteriza al electorado chileno. Intentar restaurar ese modelo de autoridad en un contexto de alta fragmentación y baja legitimidad institucional genera más resistencia que orden, y convierte una aspiración de gobernabilidad en un factor adicional de inestabilidad.

El instrumento central de esta cruzada restauradora es el Plan de Reconstrucción Nacional. Su nombre toma prestada la urgencia de las zonas devastadas por los incendios para extenderla a ámbitos mucho más amplios, construyendo la imagen de un país en ruinas que requiere intervención integral. Esta concepción tiene, sin embargo, un problema de base: Chile mantiene la mejor clasificación de riesgo soberano de América Latina, lo que contradice técnicamente la narrativa de quiebra que el ministro Quiroz ha instalado como premisa de la agenda gubernamental. Partir de un diagnóstico interesadamente exagerado es, precisamente, la primera traba para lograr un acuerdo transversal.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

El corazón de la reforma es la rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% con invariabilidad de 25 años y constituye una reforma tributaria de proporciones. El propio ministro Quiroz ha reconocido que esta rebaja no garantiza nuevas contrataciones, lo que debilita el argumento central de la Ley de Reconstrucción como motor del empleo y expone el carácter predominantemente ideológico de la medida. La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 60 años genera rechazo transversal por su carácter regresivo y el perjuicio que causa a los municipios. La supresión de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años carece de justificación razonable y genera alarmas en el mundo estudiantil. Otras medidas como fomento al empleo, rebaja del IVA a viviendas nuevas, repatriación de inversiones, reducción del gasto fiscal, podrían encontrar apoyos más amplios si la estrategia del gobierno fuera genuinamente de apertura al diálogo.

La oportunidad desperdiciada

La coyuntura chilena presenta una característica poco común en su historia reciente en el acuerdo transversal en que hay que priorizar la seguridad, el crecimiento económico y la reducción del déficit fiscal. Esos tres objetivos han sido compartidos, como pocas veces, por prácticamente todos los sectores políticos. El gobierno pudo haber construido sobre ese consenso un gran acuerdo nacional de reformas sostenibles, capaz de entregar certeza a los mercados y mejorar la gobernabilidad. En lugar de ello, eligió imponer su agenda con una mayoría circunstancial en la Cámara, sin que se observe un cambio de estrategia de cara al Senado. El problema de esta línea de acción es que genera más incertidumbre de la que pretende acotar.

Sin embargo, el camino alternativo tiene precedente reciente. La reforma al sistema de pensiones del gobierno de Boric fue una reforma limitada, pero sostenible: su valor no estuvo en la perfección de sus resultados sino en la confianza que generó de que el sistema político, aunque sea en plazos largos, puede aliviar tensiones sociales con métodos institucionales. Lo mismo vale para el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución de 2019, la Ley Naín-Retamal de 2023 o el alza del salario mínimo de 2022. En todos esos casos, tanto oficialismo como oposición demostraron capacidad de superar crisis a través de acuerdos, incluso bajo gobiernos con diagnósticos opuestos. Esa tradición no se observa en los primeros 100 días de la actual administración.

La polarización como combustible

El desempeño comunicacional y de relaciones políticas del gobierno sugiere que la actual administración no comprende la polarización social como un problema, sino como el motor que impulsa su agenda en reemplazo del diálogo. Los conceptos de "Estado en quiebra", "gobierno de emergencia" y "Ley de Reconstrucción", aderezados por el estilo "Sin Filtro" de la entonces ministra Sediti, construyeron la imagen de un Chile destruido que requiere la intervención de una nueva administración. Este es un camino ya recorrido por Bukele y Milei en nuestra región: un diagnóstico de crisis estructural con responsables identificados y soluciones propias. Independientemente de su proximidad con la realidad objetiva, esa premisa permitió al oficialismo antagonizar sistemáticamente a Boric y sus partidarios como responsables de un estado de cosas disfuncional,

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

omitiendo causas estructurales como la pandemia, la guerra comercial global y la ausencia de gobernanza regional frente al crimen organizado transnacional.

La comparación con los indicadores económicos reales desmiente esa narrativa. Las principales variables macroeconómicas del primer trimestre de Kast —crecimiento, inflación, desempleo— se muestran más débiles que las del último período de Boric, lo que invierte la lógica del relato oficialista. El gobierno que describió a Chile como un país destruido está comenzando su gestión con peores números que la administración a la que responsabiliza del desastre. Esta paradoja, es central para evaluar la credibilidad del diagnóstico gubernamental y debería ser un eje de la discusión pública en el trimestre siguiente. Su desarrollo detallado se aborda en la sección económica de este informe.

Oposición desarticulada y tensionada por Boric

Sin embargo, sería demasiado sesgado atribuir a Kast la responsabilidad exclusiva de alimentar la polarización. La oposición consolidó la obstrucción legislativa como su única oferta política durante este trimestre, aferrándose a la limitada base de legitimidad que provee la defensa de derechos alcanzados, ignorando los márgenes de mejora de las políticas que impulsó durante el gobierno de Boric, y recurriendo a la antagonización de un sujeto ambiguo -los "superricos"- mientras culpabiliza a los votantes del Presidente con frases ominosas que llaman a "disfrutar lo votado" en momentos de precarización de la vida. La oposición no logra salir del "estado de shock" de la derrota presidencial y si antes el proyecto político del progresismo estaba difuso, hoy definitivamente no existe.

Los partidos políticos tienen temas pendientes en su interior como definiciones ideológicas en congresos partidarios en el FA, el PC y el PS, cambios de directivas como en el PPD y la DC, que han retrasado acciones más decididas. La cuestión de la relación con el PDG será un elemento relevante a observar en el desarrollo de las estrategias de la oposición donde algunos apuestan a contribuir a su desgaste natural mientras que otros quieren acercarse para diluirlo como anteriormente pasó.

Con todo, la figura en la oposición con liderazgo popular y capacidad de incidencia en la agenda es Franco Parisi. Jeannette Jara parece haber tomado más distancia de la contingencia mientras que a Carolina Tohá se le ve muy presente con una estrategia de reposicionamiento. El propio Gabriel Boric se mantiene presente sobre todo con cierta notoriedad por su agenda internacional y sus intervenciones en política nacional no siempre han sido bien vistas por toda la oposición.

Un episodio de cierre del trimestre ilustra con claridad la dinámica político-comunicacional entre gobierno y oposición, y las limitaciones de ambos. En junio, más de 1.500 deudores del Crédito con Aval del Estado vieron sus cuentas corrientes embargadas por la Tesorería General de la República. El gobierno aprovechó el momento para responsabilizar a la administración Boric por haber incitado a la morosidad con una promesa de condonación que nunca se materializó. La acusación logró su objetivo inmediato: instalar la idea de que las consecuencias las paga la gestión anterior. Sin embargo, la respuesta de Boric —quien rompió el silencio que había mantenido desde el cambio de

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

mando— revirtió parcialmente ese efecto. El expresidente señaló que el gobierno prefería endurecer la mano con las familias endeudadas mientras se negaba a levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado, poniendo en evidencia la contradicción entre el discurso de emergencia del oficialismo y sus prioridades reales en materia tributaria y de seguridad.

El episodio muestra que Boric conserva capacidad de intervención pública efectiva cuando el gobierno le entrega el pie para hacerlo, y que la oposición puede articular un argumento políticamente potente cuando logra conectar decisiones concretas del gobierno con sus contradicciones de fondo. El problema es que esa capacidad permanece latente y reactiva, activándose solo cuando el oficialismo comete un error de encuadre, en lugar de emerger de una agenda opositora propia. La experiencia comparada es elocuente: en El Salvador y Argentina, la oposición institucional recurrió a estrategias similares de obstrucción con resultados contraproducentes. Las agendas oficialistas se impusieron sobre todo obstáculo legislativo, y la barrera opositora fue utilizada por el gobierno para reforzar su narrativa de que la actividad opositora es parte del problema. Aunque la antagonización que hace Kast de sus adversarios no alcanza esa magnitud, su visión de los opositores tampoco contribuye a que la ciudadanía confíe en sus representantes.

Por otro lado, las intervenciones del expresidente Boric en política contingente reviven ciertas disputas al interior de la oposición respecto a su liderazgo. Guste o no, el expresidente seguirá siendo un actor gravitante de la política nacional y claramente está en las alternativas para las próximas elecciones presidenciales. No se avizoran nuevos liderazgos potentes aunque en el mundo municipal el alcalde Vodanovic mantenga el más alto nivel de popularidad, esto se da sin mayor figuración en la agenda, en realidad su liderazgo político aún es una interrogante aunque goza de la mejor imagen pública.

El diseño del gobierno y sus fallas

Los problemas del gobierno no son únicamente comunicacionales y las fallas en las comunicaciones reflejan un problema mayor de diseño, con desequilibrios en roles y competencias.

La instalación en La Moneda evidenció que el Presidente entregó un peso importante al "Segundo piso" y, en particular, a los asesores comunicacionales que demostraron gran habilidad en campaña. El problema es que la comunicación de campaña no sirve para gobernar. Las críticas a Mara Sedini fueron más profundas que cuestiones de forma. En el fondo, nunca formó parte del comité político, no participó de las decisiones ni de las discusiones estratégicas, y su rol se limitó a comunicar libretos elaborados por otros. El despliegue de esos libretos en contextos complejos exige comprensión profunda de la política y ser parte de las estrategias. El gobierno le asignó un rol más superficial que al de sus predecesores, y su salida lo constató. Que la función de comunicaciones haya sido trasladada al Ministerio del Interior es, dado ese diseño, más una consecuencia lógica que un ajuste estratégico.

El caso de la cartera de Seguridad es más preocupante. La nominación de Trinidad Steinert fue bien recibida en un comienzo, incluso por actores de oposición: sus competencias como fiscal, su

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

conocimiento del trabajo persecutorio y sus éxitos contra el Tren de Aragua ofrecían credenciales sólidas. Pero mientras una fiscal trabaja discretamente hasta lograr una operación, los ministros deben comunicar y entregar certezas de manera permanente. Ahí la exministra mostró toda su debilidad, sin manejo de las dimensiones políticas de la cartera ni capacidades comunicacionales mínimas para el cargo. Lo verdaderamente preocupante es que la seguridad —el principal tema y promesa de la campaña de Kast— no contara desde el inicio con la persona indicada para liderarla. Es un error poco excusable que revela una grieta peligrosa: exceso de comunicación superficial sin un plan ni cuadros competentes para los desafíos reales.

El nombramiento de Martín Arrau para reemplazarla confirma el diagnóstico, aunque abre un riesgo distinto. Arrau tiene un reconocido liderazgo político —su trayectoria como Intendente de Ñuble, Presidente de Republicanos y exconvencional así lo demuestran— y puede conducir procesos complejos con solvencia. Pero el riesgo de transformar la seguridad en un trampolín presidencial es real: considerado en sus filas como el delfín de Kast, si la cartera es conducida con un criterio electoral, se estaría gestionando la política criminal con un objetivo que los estudios en la materia desaconsejan ampliamente. Quien asuma esta cartera no debiera tener agenda política propia.

Un episodio adicional ilustra los costos de la improvisación en el diseño de gobierno, y se aborda con mayor profundidad en la sección económica de este informe: la ausencia del litio en la cuenta pública del Presidente Kast, un vacío estratégico que es una señal de que el gobierno carece de una visión de desarrollo para los recursos que definirán la economía chilena en las próximas décadas.

Política exterior con costo interno

La decisión del gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, adoptada en marzo bajo el argumento de una evaluación técnica de viabilidad pero acompañada de declaraciones presidenciales que vincularon la medida con críticas a la gestión de la expresidenta, ha pasado de ser un episodio puntual a convertirse en un frente abierto de tensión interna. El trimestre cierra con señales de que la candidatura de Bachelet gana respaldos relevantes entre miembros del Consejo de Seguridad, lo que fortalece sus opciones reales de asumir el cargo. Esta perspectiva coloca al gobierno chileno en una posición incómoda: si la expresidenta resulta electa sin el respaldo de su propio país de origen, la asimetría entre el reconocimiento internacional a una figura chilena y la negativa de su Estado a sostenerla constituiría un bochorno difícil de explicar, tanto ante la comunidad internacional como ante la opinión pública doméstica. Se leería como una importante derrota del gobierno pero de no cumplirse, no necesariamente como un triunfo. El costo de apoyarla por ahora sigue siendo más bajo que de no apoyarla.

La dimensión interna del episodio es más relevante que su lectura como simple anécdota diplomática. Por un lado, ha intensificado la crispación con la oposición, que interpreta el retiro del apoyo como una extensión más de la lógica de antagonización descrita en este informe: convertir en blanco político a una figura asociada a la centroizquierda, incluso cuando se trata de una

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

candidatura que, por tradición, había operado al margen de las disputas partidistas internas. Por otro lado, y quizás de forma más significativa, la medida ha generado incomodidad en sectores de la diplomacia profesional y entre excancilleres de distintos signos políticos, para quienes el apoyo a candidaturas internacionales de expresidentes chilenos ha sido históricamente tratado como política de Estado, no como una prerrogativa del gobierno de turno. La ruptura de esa convención no solo desgasta el prestigio de la política exterior chilena en el plano internacional, sino que erosiona uno de los pocos consensos transversales que sobrevivían entre administraciones de distinto signo.

El segundo frente con implicancias internas relevantes es el conflicto en torno al proyecto del cable submarino, que conecta a Chile con China y en cuyo desarrollo Estados Unidos y China intervienen de manera excluyente. El episodio es un ejemplo de improvisación en política exterior y dejó a Chile en una posición incómoda frente a ambos socios estratégicos, China y Estados Unidos. Más allá del resultado específico de este proyecto, el episodio puso sobre la mesa una discusión de fondo en torno a la necesidad de actualizar la institucionalidad chilena en materia de soberanía digital e infraestructura crítica, un ámbito donde el país efectivamente arrastra un vacío regulatorio relevante frente a la creciente disputa geopolítica por cables submarinos, centros de datos y redes de telecomunicaciones.

Sin embargo, la forma en que se resuelva esa actualización institucional importa tanto como el hecho de resolverla. Existe el riesgo de que, presionado por su alineamiento con Washington, el gobierno adopte sin mayor deliberación un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras —en la línea de los esquemas de "investment screening" que Estados Unidos promueve entre sus socios— diseñado a la medida de las exigencias de ese país, en lugar de construir un marco regulatorio que responda a las prioridades, capacidades institucionales y necesidades de inserción internacional propias de Chile. La diferencia no es menor: un mecanismo importado bajo presión externa tiende a privilegiar los intereses estratégicos del país que lo exige, mientras que una institucionalidad diseñada a la medida de Chile podría equilibrar la necesidad de proteger infraestructura crítica con la conveniencia de mantener relaciones equilibradas con múltiples socios comerciales y tecnológicos, evitando profundizar el patrón de alineamiento unilateral que este informe ha documentado en otras áreas.

En conjunto, los casos Bachelet y el cable a China muestran que la política exterior del gobierno de Kast opera como una extensión de la misma lógica de polarización y antagonización que define su gestión interna. Las decisiones en este ámbito generan costos de gobernabilidad que se suman a los ya identificados en el plano legislativo y comunicacional, con el agravante de que los errores en política exterior suelen ser más difíciles de revertir y más visibles para audiencias internacionales cuya percepción de Chile incide directamente en variables económicas.

El costo en aprobación de la figura presidencial

La tabla n°1 resume los resultados de las principales encuestas de la plaza que interrogan por la aprobación del presidente de la república. Se consideran los porcentajes con respuestas

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

Tabla n°1

Aprobación presidencial según principales encuestas de la plaza entre inicios de marzo e inicios de junio 2026

Encuesta	Inicio de marzo	Fin de marzo	Fin de abril	Fin de mayo	Inicio de junio
Pulso Ciudadano	47%	34%	29%	31%	30%
Criteria	46%	43%	38%	36%	39%
Cadem	57%	43%	40%	38%	43%
Panel ciudadano UDD	59%	42%	39%	35%	59%
Latam Pulse	—	55%	53%	49%	—
CEP	—	—	—	34%	34%
Data Influye	—	41%	33%	26%	—
Promedio	52,2%	43%	38,6%	35,5%	41%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas citadas.

Nota: El promedio entre encuestadoras tiene carácter referencial. Las encuestas incluidas difieren en metodología, tamaño muestral y modalidad de aplicación, y el número de encuestadoras varía entre períodos, lo que limita la comparabilidad directa entre columnas. Su valor analítico reside en la consistencia direccional: ninguna encuesta contradice la tendencia a la baja registrada entre marzo y mayo.

Entre inicios de marzo y fin de mayo el gobierno perdió en promedio 17 puntos de aprobación, una caída pronunciada y sostenida que ninguna encuesta quincenal contradice. Las decisiones respecto al MEPCO, el alza de las bencinas y los problemas comunicacionales del inicio del gobierno asociadas a las ministras salientes probablemente jugaron un papel relevante en esta caída. Sin embargo, tras el cambio de gabinete antes de la Cuenta Pública el presidente recupera terreno en las encuestas. Es probable que esta alza en la aprobación haya sido influida por el cambio de gabinete y algunos anuncios de la cuenta pública como el Registro Único de Vándalos e Incivildades junto con los cobros del CAE a los deudores de altos ingresos.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

La primera cuenta del presidente se concentró bastante en la continuidad de su relato de emergencia, sin ninguna autocrítica por el mal debut en materias clave. El discurso de emergencia ya comienza agotarse y puede generar efectos contraproducentes. Forzar una idea de emergencia impide mostrar un país pujante y que sale adelante y centra la discusión permanentemente en fallas estructurales que el mercado- sobre todo internacional-no verifica en Chile. El relato del fortalecimiento de la seguridad se vio empañado por el pésimo debut de sus equipos en la materia y las medidas planteadas para fortalecer las fronteras, apoyar a carabineros y combatir el crimen parecen más de continuidad que una innovación. Pero hay un amplio espacio para mejorar en la gestión de los instrumentos existentes.

Asimismo, tras el cambio de gabinete se presentó la fusión de los ministerios del Interior con Segegob y el Ministerio de Obras Públicas con Transporte y Telecomunicaciones, ambas operaciones si bien pueden parecer adecuadas, despiertan suspicacia sobre si son parte de una estrategia o por falta de altos cuadros para asumir la tarea. Si es una estrategia, la Fusión de Interior con Segegob implica que la gestión de las comunicaciones gubernamentales quedaría en la Subsecretaría del Interior, lo que puede ser una buena idea y que no obliga al Ministro del Interior a estar expuesto constantemente a la prensa. Igualmente, tiene la ventaja de centrar las comunicaciones en el corazón de la política y evitar que se banalice como tendía a pasar en Segegob con un exceso de apariciones en diferentes plataformas. Comunicar la política del gobierno no necesariamente implica estar en todos los formatos y de todas las formas, al menos no de parte de las autoridades. En obras públicas puede ser más complejo, puesto que si bien son carteras muy cercanas y complementarias, en la práctica son enormes en tareas y complejidades propias que exigirán elevar el perfil de los subsecretarios y un ministro con rendición de cuentas en muchos frentes. Una apuesta riesgosa. En cualquier caso, esta fusión, no implica disminución de tareas y no representa por el momento un ahorro considerable para el Estado. La modernización parece más bien reorganización ad-hoc a las necesidades del gobierno, pero el anuncio de una convocatoria de expertos para rediseñar una nueva arquitectura del Estado que ajuste las estructuras a las necesidades es una buena noticia.

Los ajustes realizados por el gobierno refuerzan la percepción de un gobierno que asume rápido sus problemas, un atributo que los partidarios de Kast valoran positivamente en las encuestas. El ajuste de gabinete, en particular, ha favorecido la imagen presidencial al reducir la visibilidad de las debilidades de la gestión republicana en áreas tan sensibles como la seguridad. En cuanto al Registro Único de Vándalos e Incivildades (en detalle en la sección sobre seguridad) y el cobro a los deudores del CAE (en detalle en la sección de economía), ambas medidas no generan rechazo transversal y amplios sectores de la ciudadanía las interpretan como una reafirmación del orden social, donde los deberes anteceden a los derechos.

Sin embargo, estos hitos podrían marcar una tendencia preocupante con la adopción de medidas de efecto inmediato orientadas a sostener la aprobación antes que a resolver problemas de fondo. La salida de Sedini y Steinert no corrige los problemas estructurales de un modelo de

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

governabilidad vertical sin espacios ni iniciativas de diálogo transversal real. Del mismo modo, el Registro Único de Vándalos e Incivildades no aborda las causas estructurales de la violencia y las incivildades, así como el cobro a los deudores del CAE elude la cuestión de fondo del modelo de financiamiento de la educación superior.

Governabilidad: lo que el segundo trimestre debe responder

El balance político de los primeros 100 días deja abiertas tres preguntas cuya respuesta definirá la trayectoria del gobierno en los próximos meses. La primera es si el oficialismo es capaz de modificar su estrategia legislativa de cara al Senado, donde su mayoría circunstancial es más estrecha y los costos del unilateralismo más altos. La segunda es si la oposición logra trascender la obstrucción y construir una oferta política propia, o si seguirá dependiendo de los errores del gobierno para tener momentos de eficacia. La tercera es más estructural, y es si la caída sostenida de aprobación de Kast genera algún ajuste en el estilo de conducción, o si el gobierno interpreta esa señal como ruido prescindible en su narrativa de emergencia.

El indicador más relevante a observar los próximos meses no es la aprobación presidencial en sí, sino la evolución de la confianza en las instituciones políticas en su conjunto. Si el bloqueo mutuo entre oficialismo y oposición se consolida como el modo normal de funcionamiento del sistema, el deterioro no afectará solo al gobierno sino que erosionará la legitimidad del Congreso, de los partidos y del propio mecanismo democrático como instrumento de resolución de problemas. Ese es el escenario que la historia reciente de la región y la puerta para la consolidación de modelos de gobierno más autoritarios o iliberales.

Economía

Hechos destacados

- Kast inició su mandato con cifras heredadas auspiciosas. La inversión extranjera marcó un récord superior a US\$14.000 millones, el PIB con alza de 2,5% e Imacec promedio en igual rango durante 2025. El panorama se deterioró rápidamente. El Imacec cayó 0,1% en marzo y 1,2% en abril, el PIB del primer trimestre retrocedió 0,5% respecto al mismo período de 2025, y la Cepal proyectó un crecimiento de solo 2% para el año, muy por debajo del 4% prometido en campaña⁸.
- La inflación acumuló un 1% en el trimestre, impulsada por el encarecimiento de los combustibles ante la negativa del gobierno a activar el Mepco. Las tarifas eléctricas subirán un 4,9% en julio según la Comisión Nacional de Energía. El desempleo del trimestre febrero–abril alcanzó el 9,1%, el nivel más alto en cinco años⁹.
- En el frente externo, las exportaciones acumuladas entre enero y abril sumaron US\$39.772 millones y las remuneraciones reales acumulan 37 meses consecutivos de alza¹⁰.

Tabla n°2. Comportamiento de los principales indicadores económicos en los primeros meses de gobierno de José A. Kast

Indicador	Observación
Inflación acumulada	2,8%
Desempleo	9,1%
Imacec marzo y abril	-0,2% y -1,2% respectivamente
PIB trimestral	-0,5%
Tipo de cambio (15/06/2026)	893 CLP por USD

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas, Gobierno de Chile.

- El ministro Quiroz justificó la negativa a usar el Mepco y el anuncio de recortes del 3% al gasto ministerial alegando haber heredado un fisco sin caja. Un informe de la Dipres matizó la versión ya que en febrero la caja contaba con US\$3.617 millones disponibles.¹¹ El recorte

8 Ministerio de Economía de Chile, 11 de febrero del 2026. Banco Central, Cuentas Nacionales. Cepal, 27 de abril del 2026.

9 Banco Central, Cuentas Nacionales. El Mostrador, 14 de junio del 2026. Instituto Nacional de Estadísticas, ocupación y desocupación.

10 Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 08 de mayo del 2026. Instituto Nacional de Estadísticas, remuneraciones y costos laborales.

11 DIPRES, 31 de marzo del 2026.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

al Ministerio de Seguridad fue revertido tras acuerdo con la exministra Steinert, revelando tensiones internas en la coalición¹².

- En abril, Hacienda emitió oficios recomendando discontinuar 142 programas públicos. Entre los afectados figuraban la Junaeb, la Beca Vocación de Profesor, el programa de prevención del suicidio y el Programa de Derechos Humanos, generando amplia controversia política¹³.
- El 22 de abril, Kast presentó al Congreso un proyecto de ley misceláneo que tituló “Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”. El proyecto incluye medidas como la agilización de permisos ambientales y sectoriales, rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23%, reintegración total del impuesto de Primera Categoría con el Global Complementario (impuesto a la renta de las personas), una devolución de impuestos de empresas que mantengan sus niveles de empleo, una disminución de los impuestos a las donaciones, una reducción de los impuestos para la repatriación de capitales, eliminación de contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años y la introducción de invariabilidad tributaria para todos los proyectos de inversión de US\$50 millones o más. En cuanto a reconstrucción el proyecto contempla asignar US\$400 millones para la construcción de viviendas de damnificados por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de diputados con los votos de la derecha y 13 diputados del PDG; la izquierda lo rechazó en bloque.
- El Consejo Fiscal Autónomo en dos presentaciones al Congreso, el 5 de mayo y el 8 de junio, advirtió que el proyecto generará déficits fiscales al menos hasta 2031¹⁴.
- El ministerio de Hacienda emitió un informe cuestionando las proyecciones de deuda pública del gobierno anterior, derivando en una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau impulsada por la derecha radical. Grau señaló que las discrepancias obedecen a la proyección de ciertas variables económicas, como inflación y tipo de cambio, no contempladas por las nuevas autoridades¹⁵.
- El gobierno activó el cobro forzado del CAE para deudores con ingresos superiores a \$3,5 millones mensuales, con embargo de activos y retención de cuentas bancarias¹⁶.

¹² The Clinic, 24 de abril del 2026.

¹³ Ministerio de Hacienda, 21 de abril del 2026.

¹⁴ CFA, 5 de Mayo del 2026,

¹⁵ Emol, 26 de mayo del 2026. DIPRES, 3 de febrero del 2026.

¹⁶ Gobierno de Chile, 17 de abril del 2026. La Tercera, 14 de abril del 2026.

Análisis

Un modelo ortodoxo de shock

Los analistas locales, especialmente del sistema financiero, asumieron anticipadamente que la llegada de un gobierno de derecha elevaría el optimismo empresarial y aceleraría la reactivación económica. Pero la realidad dista de cumplir esa expectativa optimista y el gobierno decidió comenzar su gestión económica con un shock en el marco del alza del precio de los combustibles, una decisión arriesgada.

Al prescindir del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el gobierno trasladó íntegramente el shock externo al mercado interno, encareciendo los costos logísticos, presionando la UF al alza y erosionando el poder adquisitivo de los hogares. En el mercado laboral, la situación no es mejor: el desempleo nacional supera el 9%, sin que la inversión haya generado puestos de trabajo suficientes para absorber el crecimiento demográfico ni responder a una fuerza laboral progresivamente más calificada. Para un gobierno que hizo del aumento del empleo una de sus promesas centrales de campaña, estas cifras constituyen un flanco de vulnerabilidad que no puede ignorarse.

Las medidas adoptadas en los primeros tres meses confirman que la ortodoxia neoliberal llegó a La Moneda. El nuevo gobierno no opera desde un diagnóstico técnico de la situación económica, sino desde una narrativa deliberadamente catastrófica que busca instalar la percepción de que el país está al borde del abismo. La paradoja es evidente: una estrategia comunicacional basada en el pánico económico es contraproducente para generar precisamente la confianza que los mercados requieren. El ministro Quiroz fue el rostro más visible de esa estrategia al declarar que la caja fiscal se encontraba vacía, profundizando la sensación de descalabro. La Dipres matizó esta versión acreditando que la administración anterior a febrero 2026 dejó 3617 millones de USD disponibles, pero esos datos resultaron irrelevantes para las nuevas autoridades, que prefirieron sostener el relato de crisis con los reportes de caja al 31 de diciembre del 2025 y no con los que el gobierno saliente entregaba el mando.

El episodio de la acusación constitucional contra el exministro Grau ilustra bien esta dinámica. Más que un reproche técnico fundado, la acusación es un instrumento para desgastar la imagen de la administración anterior y consolidar la narrativa oficial de herencia envenenada. El problema de los errores en las proyecciones de recaudación tributaria no es nuevo ni atribuible a la mala fe, sino que es una debilidad estructural del Ministerio de Hacienda que requiere fortalecimiento técnico, no procesos políticos. La institucionalidad chilena hace prácticamente imposible el maquillaje de cifras fiscales, dado que la Dipres las publica mensualmente y la Contraloría tiene por mandato

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

constitucional revisarlas y reclasificarlas. Lo que sí genera la acusación es una sombra de duda sobre la credibilidad del Ministerio de Hacienda, erosionando una fortaleza institucional que el país se ha ganado a lo largo de los años. De prosperar, esta acusación podría terminar revirtiéndose contra el propio ministro Quiroz o sus sucesores ya que el precedente que establece de cuestionar política y jurídicamente proyecciones de ingresos elaboradas bajo supuestos que ningún gobierno controla por completo, se aplicaría con la misma lógica a las propias estimaciones de la actual administración. Pese a ese riesgo, evidente para quienes siguen la institucionalidad económica del país, no se observa al gobierno actuando para desactivar una acusación que, a todas luces, termina perjudicando al sistema en su conjunto.

Buena parte del empresariado recibe con optimismo a la nueva administración, y no sin razón, las señales de política económica apuntan consistentemente en su dirección. La propuesta de reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% mejora directamente la tasa de retorno sobre la inversión, así como la devolución de impuestos por no reducir el empleo. Lo mismo ocurre con las demás reducciones y exenciones tributarias.

La agenda económica del gobierno no favorece de igual manera al mundo privado en su conjunto. Por ejemplo, cuando Hacienda cuestiona los programas de alimentación de la Junaeb por su costo fiscal, está cuestionando a los proveedores privados cuya actividad depende de las compras del Estado. Del mismo modo, la decisión de prescindir del Mepco reduce el gasto discrecional de los hogares, golpeando especialmente a la gastronomía y el entretenimiento, sectores que dependen directamente del ingreso disponible de las familias.

Las medidas de la nueva administración favorecen a las grandes empresas, mientras transfieren costos -directa o indirectamente- a las pequeñas empresas, los trabajadores y los hogares de menores ingresos. El Plan de Reconstrucción Nacional es, en esencia, una transferencia de recursos hacia los sectores de mayores ingresos bajo la premisa de que la desregulación y los incentivos al capital privado producirán mayor inversión, empleo y crecimiento. Esta lógica ignora uno de los problemas estructurales más persistentes de la economía chilena: la escasa complejidad de su matriz productiva. La actividad económica sigue concentrada en la extracción de recursos naturales, el comercio y los servicios, con una industria manufacturera reducida a su expresión más ligera. El bajo crecimiento de la última década tampoco tiene su origen principal en la carga tributaria. Chile creció al 7% en los años 90 y al 5% en la primera década del 2000, pero desde 2013-2014 ha crecido a una tasa promedio de 2% anual. El quiebre coincide con el agotamiento del ciclo minero, la producción de cobre alcanzó un techo cercano a los 5,5 millones de toneladas y no ha variado significativamente, lo que contrajo la inversión minera y arrastró el crecimiento general. Avanzar hacia una industrialización tecnológica requiere una masa crítica de profesionales calificados que el país aún no tiene, pero esa brecha puede cerrarse con planificación estratégica desde el Ministerio de Economía, apoyando las inversiones en sectores con potencial exportador: litio, energías verdes, hidrógeno verde y construcción prefabricada de madera. Sin esa dirección, el

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

plan de Kast apuesta por un crecimiento que depende del interés del sector privado en asumir riesgos, sin ofrecer instrumentos de apoyo orientados al desarrollo productivo de largo plazo.

Un costo fiscal preocupante

El costo fiscal del plan es cuantificable y preocupante. La rebaja del impuesto corporativo al 23%, aplicada de forma gradual entre 2027 y 2029, implicaría una merma en la recaudación de aproximadamente US\$1.800 millones anuales en régimen¹⁷, que el gobierno pretende financiar con el mayor crecimiento que la propia medida generaría. El propio Informe de Estadísticas Tributarias del Ministerio de Hacienda establece que, por cada punto porcentual de reducción del impuesto corporativo, el fisco deja de recaudar el 0,13% del PIB, y que el 79,1% de ese beneficio se concentra en el 1% de contribuyentes de más altos ingresos¹⁸.

Las advertencias técnicas sobre esta apuesta son transversales. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, estimó que el plan genera un impacto fiscal neto negativo y que “los costos fiscales y las rebajas tributarias son inmediatos y seguros, mientras que los beneficios dependen de ingresos futuros asociados a un mayor crecimiento, cuya materialización es incierta”¹⁹. El proyecto presenta déficits fiscales de hasta 0,71% del PIB al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto del mayor crecimiento proyectado²⁰, lo que contrasta con un crecimiento potencial estimado en 0,41% del PIB. Sin incorporar ese efecto, el plan generaría un deterioro fiscal permanente del 0,43% del PIB en régimen al año 2050²¹. El CFA fue categórico en señalar que “las fuentes de financiamiento consideradas no compensan completamente los menores ingresos fiscales”, lo que obliga a identificar fuentes adicionales no contempladas en el proyecto. Bajar impuestos corporativos cuando ya existe un déficit fiscal agrava el problema que se pretende resolver, el crecimiento adicional que podría generar la medida no alcanza para compensar la pérdida de ingresos tributario, y el 67% del presupuesto -pensiones, educación y salud- no admite recortes de la magnitud necesaria para compensar la caída en la recaudación.

Esta arquitectura fiscal descansa sobre proyecciones de ingresos que varios economistas consideran sobreestimadas. Si el crecimiento prometido no se materializa al ritmo esperado, lo que es un riesgo real dado el contexto internacional, el déficit se prolongará más allá de 2031 sin mecanismos de corrección previstos, comprometiendo la estabilidad macroeconómica que Chile ha construido durante décadas.

17 Ministerio de Hacienda, Informe de Estadísticas Tributarias, marzo de 2026.

18 Diario Uchile, 05 de mayo del 2026.

19 Ibid.

20 Demócrata.es, 6 de mayo de 2026.

21 24 Horas, 8 de junio del 2026.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

El flanco más delicado, con todo, es el gasto social. Los oficios de Hacienda que recomendaban recortar la PGU, becas, Junaeb y programas de salud mental revelaron que esta administración estuvo dispuesta a considerar medidas que afectan directamente a los sectores más vulnerables. Es probable que varios de esos recortes no prosperen dado su alto costo político, pero el solo hecho de haberlos planteado ya dañó la imagen del gobierno. En ese escenario, la derecha tradicional -UDI, RN y Evópoli- enfrenta la tarea de contener a la derecha radical en La Moneda antes de que su agenda derive en un conflicto social de gran envergadura. Si Kast termina desistiendo de sus propuestas más ortodoxas para evitar ese desgaste, pagará otro precio de la decepción de su electorado más ideologizado.

El cobro forzoso del CAE, aunque reduzca algo la deuda morosa de 4 mil millones de pesos, difícilmente será significativo. El embargo se aplicó solo a deudores con ingresos sobre 3,5 millones mensuales, mientras la mayoría de los morosos está bajo ese umbral. El problema de fondo persiste, ya que el modelo de financiamiento del CAE seguirá generando déficits estructurales para el Estado. La solución pasa por reemplazarlo por un sistema financieramente viable y equitativo, diagnóstico que es compartido transversalmente, junto elementos como el retiro de la banca privada del corazón del financiamiento, la instalación de una forma más eficiente del cobro de los créditos y manteniendo la autonomía de las casas de estudio para fijar sus aranceles, con ciertos límites. En este último punto existieron anteriormente fuertes diferencias que deberán ser retomadas si se quiere avanzar en un mejor sistema, de lo contrario, el Estado arrastrará constantemente esta “mochila” de deudores. Esta administración debiera presentar una alternativa al Fondo de Educación Superior (FES) que propuso Boric y que fracasó en el Senado.

Continúa la incertidumbre

El primer trimestre del gobierno Kast revela una brecha significativa entre las promesas de campaña y la gestión efectiva, los indicadores de crecimiento y empleo van en dirección contraria a lo prometido, mientras las medidas adoptadas benefician principalmente al gran empresariado, transfiriendo costos a los hogares más vulnerables. La narrativa de crisis heredada, y el uso político de la acusación constitucional contra Grau, sugieren que el gobierno prioriza el relato sobre el diagnóstico. El proyecto misceláneo, mal llamado de Reconstrucción Nacional, que el CFA proyecta deficitario al menos hasta 2031, no ofrece respuestas a los problemas estructurales de la economía chilena. El trimestre cierra, en suma, con más incertidumbre que certezas sobre la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos centrales.

Seguridad

Hechos destacados

- Durante los primeros meses del gobierno de Kast, la agenda de seguridad estuvo marcada por una tensión constante entre las expectativas sobre los resultados y la falta de gestión institucional. En marzo, el quiebre público entre el Ministerio de Seguridad y la PDI por los traslados de funcionarios del caso Clan Chen derivó en el llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, generando tensiones políticas en el oficialismo²².
- Un polémico recorte presupuestario de \$72.669 millones a las policías logró ser revertido²³. En abril, la narrativa oficial se complicó, mientras el gobierno difundió una caída del 14,2% en homicidios, los balances acumulados desde la asunción de Kast mostraban un aumento del 2,1% de las víctimas²⁴. Además, la fallida sesión por el proyecto de ley que busca modernizar a Carabineros, suspendida por ausencia de la ministra Steinert, evidenció descoordinación del Ejecutivo²⁵.
- Kast promulga ley que traspasa gendarmería de Chile desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, un trabajo que viene desde el gobierno anterior²⁶.
- El Ministerio de Seguridad se auto adjudicó los resultados del megaoperativo en Temucuicui, donde las autoridades gubernamentales no participaron sino más bien fue coordinado entre las propias fuerzas armadas y de orden²⁷.
- Kast decidió remover a la ministra Steinert tras solo 69 días luego de que ella misma reconociera que no existía un plan formal de seguridad. El liderazgo de tal ministerio quedó en manos de Martín Arrau, quien admitió que este gobierno seguirá el mandato de la política de seguridad pública de Gabriel Boric.
- Kast anuncia 7 fuerzas de tarea en seguridad y plantea polémica medida de Registro Único de Vándalos e Incivildades para combatir la incivildades²⁸.

22 La Tercera, 23 de marzo del 2026.

23 La Tercera, 30 de marzo del 2026.

24 La Tercera, 13 de abril del 2026.

25 El Mostrador, 14 de abril del 2026.

26 Biobío, 09 de abril del 2026

27 Biobío, 15 de mayo del 2026. El País, 19 de mayo del 2026. La Tercera, 16 de mayo del 2026. El Mostrador, 20 de mayo del 2026.

28 Exante, 01 de junio del 2026

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

- El nuevo ministro de Seguridad Martín Arrau presenta el cuestionado plan de seguridad, con 3 ejes y 26 proyectos²⁹, remueve a los dos subsecretarios de la cartera.
- El 2 de junio se lleva a cabo la Operación Tokio, por la Fiscalía Metropolitana Oriente que desbarató una red que operaba en el banco Santander para el lavado de 78 mil millones en el mercado formal para el Tren de Aragua. Días más tarde, se realiza un histórico decomiso de 100 mil kilos de droga de diverso tipo en Arica, el hecho muestra el fortalecimiento de la investigación de la Fiscalía Nacional³⁰.

Análisis

Un comienzo fallido

José Antonio Kast ha confirmado que la seguridad pública se posicionó como el principal mecanismo de legitimación política del Ejecutivo. Sin embargo, lejos de mostrar una maquinaria cohesionada, el período ha estado marcado por una tensión persistente entre alta intensidad operativa, conflictos institucionales internos, contradicciones presupuestarias y ausencia de una estrategia clara de mediano plazo. El gobierno no ha mostrado claramente un nuevo modelo para enfrentar la inseguridad sino que reacciona compulsivamente a la presión ciudadana y mediática, privilegiando el impacto comunicacional sobre la planificación sostenible.

La instalación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, liderado inicialmente por la exfiscal Trinidad Steinert, ocurrió en un escenario de alta exposición, pero también de desajustes iniciales en la articulación entre prioridades políticas, gestión institucional y recursos disponibles. Desde la primera semana, la combinación de operativos masivos de control territorial con un significativo recorte presupuestario a las policías envió señales contradictorias. Por un lado, se buscaba proyectar una imagen de mano dura inmediata y por el otro se debilitaba la capacidad operativa de las propias instituciones encargadas de sostener estos logros. La posterior reversión del recorte no hizo más que confirmar que el diseño inicial carecía de consistencia interna y que la improvisación marcaba la pauta.

El conflicto entre el Ministerio de Seguridad y la PDI, desatado por los traslados de funcionarios que investigaban al crimen organizado en Tarapacá y que culminó con la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, introdujo una señal compleja en la gobernanza del sistema. Más allá del caso específico, el episodio tensionó el equilibrio entre conducción política y autonomía operacional en un ámbito particularmente sensible como la inteligencia criminal. La intervención del nivel político en decisiones de esta naturaleza introduce riesgos en términos de confianza institucional y coordinación operativa, especialmente en investigaciones que requieren estabilidad de equipos y manejo reservado de información.

En abril el Ejecutivo articuló reformas institucionales como el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, ampliación de facultades administrativas para expulsar migrantes (aún en trámite), cooperación internacional con el FBI y endurecimiento penal con proyectos como

29 El Mostrador 3 de Junio.

30 La Tercera, 02 de junio del 2026; BioBio, 06 de Junio 2026.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

Escuelas Protegidas. Esta acumulación de medidas respondió a una estrategia política que busca construir gobernabilidad mediante la demostración permanente de autoridad y capacidad de coerción. Sin embargo, el caso de las cifras de homicidios reflejó las contradicciones internas de esta narrativa. Mientras la Subsecretaría de Prevención del Delito difundió una caída del 14,2% en los homicidios entre enero y abril, los balances acumulados desde la asunción de Kast mostraban un aumento del 2,1% de víctimas según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta contradicción reveló el carácter crecientemente instrumental de las estadísticas de seguridad, que dejaron de cumplir una función diagnóstica para operar como dispositivos de producción de percepción pública, incentivando políticas orientadas a impactos comunicacionales rápidos antes que a transformaciones estructurales sostenidas.

Respecto al control migratorio y el reforzamiento de fronteras, la realidad dista bastante de lo prometido en campaña. Recién a mediados del mes de abril salió el primer velo con inmigrantes expulsados, de los 300 mil que se prometió expulsar. Cifra que hoy el mismo presidente reconoció como “metáfora” ante la imposibilidad real de concretar tantas expulsiones. Asimismo la construcción de zanjas ha sido bastante inútil y poco eficaz. Las medidas que han logrado controlar mejor las fronteras son las que se vienen aplicando desde la administración anterior con mejor coordinación entre policías y ejército, adopción de tecnologías sofisticadas de control y fortalecimiento del personal en la frontera.

Continuidades y operativos exitosos de la Fiscalía

Por otro lado, la reforma constitucional que trasladó Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública constituyó probablemente la expresión más clara de un proceso de securitización que viene desde el gobierno anterior. Esta decisión representa la integración del sistema penitenciario a la arquitectura de seguridad interior del Estado, concibiendo la cárcel centralmente como un espacio de contención de amenazas antes que como un ámbito de rehabilitación y reinserción social. El problema es que esta transformación ocurre en un sistema penitenciario ya profundamente deteriorado por hacinamiento, violencia y expansión de organizaciones criminales al interior de los recintos, donde el verdadero problema es que la cárcel no cumple un rol y se hace parte de la reproducción del crimen. Gendarmería corre el riesgo de ser parte de este círculo y no parte de las soluciones si es que no tiene una fuerte dimensión de control interno. Con la tasa de aumento del encarcelamiento que tenemos hoy que supera los 63 mil reclusos en un sistema diseñado para 40 mil, al 2030 el colapso carcelario es inminente. Las 20 mil plazas adicionales anunciadas por el gobierno no lograrán mejorar realmente la situación. Se requiere un plan más ambicioso para descomprimir las cárceles con penas alternativas y mejores modelos de rehabilitación para la reinserción social efectiva.

El mes de mayo reflejó las consecuencias de esta fragilidad estratégica. Mientras la entonces ministra Steinert reconocía públicamente la inexistencia de un plan formal de seguridad, el gobierno se adjudicó el megaoperativo de Temucoicui. No obstante, el gobierno realmente no lideró en este operativo sino que fue coordinado por la Fiscalía y las policías. El posterior cambio de gabinete del 19 de mayo, con la salida de Steinert tras solo 69 días en el cargo mostró los costos políticos asociados a la ausencia de una hoja de ruta definida. Más aún, el nuevo ministro Arrau señaló que la administración continuaría utilizando la política nacional de seguridad pública heredada del gobierno anterior, introduciendo una tensión política difícil de ignorar.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

Sin embargo, la declaración del nuevo ministro no solo responde a una necesidad administrativa, sino también a una constatación política de fondo. En materia de seguridad, el gobierno de Boric ya había consolidado una agenda de fortalecimiento estatal, endurecimiento normativo y ampliación de capacidades coercitivas que fue, en buena medida, empujada, respaldada o al menos tolerada por los sectores que hoy forman parte del oficialismo. La Política Nacional de Seguridad Pública, diseñada con un horizonte de seis años para acompañar la implementación del nuevo Ministerio, no fue el resultado de una orientación exclusivamente gubernamental, fue una convergencia más amplia en torno a la securitización como respuesta privilegiada frente a la crisis. En ese marco, la continuidad que hoy reconoce Arrau no constituye una anomalía, sino la evidencia de que existe una base programática e institucional que trasciende el cambio de administración. La disputa política, por tanto, no radica en si esa orientación debe mantenerse, sino en quién la conduce, con qué prioridades y bajo qué relato de legitimación. El desafío del nuevo ministro será precisamente traducir esa continuidad en una identidad política propia, capaz de reforzar la agenda de su sector sin desconocer que parte importante de esa arquitectura fue heredada del ciclo anterior

Se refuerza la agenda de seguridad

La seguridad concentró los anuncios más ambiciosos del discurso presidencial en la Cuenta Pública. El eje central fue el Plan de Intervención Barrial Intensivo, que contempla el despliegue coordinado de capacidades del Estado en 50 barrios críticos mediante copamiento policial y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales. A esto se suma la creación de siete Fuerzas de Tarea bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, que reunirán a policías, Ministerio Público, Gendarmería y organismos fiscalizadores en áreas específicas: fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y violencia en la macrozona sur. En el ámbito penitenciario, el gobierno anunció el fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad y un Plan de Infraestructura Penitenciaria al 2030 que proyecta más de 20 mil nuevas plazas.

La agenda legislativa asociada, calificada de urgente a partir del 2 de junio, incluye ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, reforzar las facultades autónomas de las policías, fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión, y sancionar el uso de pasamontañas en protestas. La medida más controversial es el Registro Único de Vándalos e Incivildades: un proyecto de ley que crearía un padrón nacional de quienes cometan delitos contra Carabineros, personal de salud o infraestructura pública, o incurran en incivildades como rayados o consumo de drogas en espacios públicos, con la consecuencia de perder beneficios sociales como la gratuidad educativa, la PGU o el subsidio de arriendo. En conjunto, los anuncios configuran una agenda de seguridad de alta intensidad retórica cuya concreción dependerá en gran medida del trámite legislativo, dado que la mayoría de las medidas requieren aprobación parlamentaria.

La creación de un registro de vándalos responde a una demanda ciudadana legítima y la atención a las incivildades es, en principio, una política necesaria. Sin embargo, el mecanismo elegido presenta sesgos relevantes. La pérdida de beneficios sociales como sanción afecta desproporcionadamente a quienes más dependen de ellos, introduciendo un sesgo de clase que castiga con mayor severidad a los sectores más vulnerables. A esto se suma el riesgo de estigmatización temprana de jóvenes, agravado por la ausencia de medidas reparatorias que

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

permitan salir del registro ni componentes educativos orientados a la prevención. Sin una vía de reinserción, la medida puede convertirse en una puerta de entrada a la marginalización y, paradójicamente, a la profundización de las conductas que pretende corregir.

El crimen organizado está en la banca

La Operación Tokio, calificada como el golpe más significativo contra el Tren de Aragua en territorio chileno, confirmó la capacidad investigativa de la Fiscalía y la PDI tras dos años de trabajo coordinado que resultaron en la desarticulación de una célula de 19 personas que movilizó cerca de \$78 mil millones mediante extorsión y lavado de dinero. El caso reveló una señal de alarma mayor al constatar la penetración del crimen organizado en la banca privada, con un ejecutivo del Banco Santander involucrado en el lavado de ganancias. Ello exige avanzar con urgencia hacia estándares OCDE en materia de levantamiento del secreto bancario y fiscalización de instrumentos financieros complejos como criptomonedas y activos digitales incluidos, acompañados de garantías robustas de protección de datos y resguardo de los expedientes en curso para evitar filtraciones que comprometan las investigaciones. La parte de más relevante de los recursos del crimen organizado está en los negocios al límite de lo lícito y en mercados ilícitos, las herramientas del Estado para combatirlos deben estar a la altura de la sofisticación y recursos de estas organizaciones. Un examen más estricto a los funcionarios bancarios también es deseable junto con una rendición de cuentas sobre estos protocolos a los bancos. Los éxitos de la Fiscalía en esta operación como en el decomiso histórico de 100 mil kilos de droga en Arica, muestran que el fortalecimiento institucional es una tarea de Estado y los resultados son transversales a los gobiernos de turno.

Reset

El primer trimestre del gobierno Kast en materia de seguridad exhibe una alta intensidad en el relato y una baja consistencia en la gestión. El período comenzó con conflictos institucionales, recortes presupuestarios revertidos y la salida de una ministra que admitió no tener un plan formal, y cerró con anuncios ambiciosos en la Cuenta Pública cuya concreción depende del trámite legislativo. Los logros más contundentes del trimestre como la Operación Tokio y el decomiso histórico en Arica, no son atribuibles a la conducción política del Ejecutivo, sino al fortalecimiento institucional acumulado de la Fiscalía y las policías, que trasciende los gobiernos de turno. Lo que el trimestre no logró mostrar es precisamente lo que el gobierno prometió: un modelo propio, coherente y sostenible para enfrentar la inseguridad. La agenda legislativa anunciada en junio puede corregir parte de esa deuda, pero para ello deberá superar la tensión que ha caracterizado estos tres meses como es la distancia entre la urgencia del relato y la solidez de la institucionalidad que lo respalda. Es de esperar que el nuevo ministro Arrau en los próximos meses avance fuertemente en medidas de control in situ con amplio despliegue de policías en estrategias de copamiento, esperando dar un golpe de timón. El gobierno es muy consciente que la percepción de inseguridad es el principal frente a atacar para ganar legitimidad y tiene muchas herramientas a la mano para poder intervenir.

Internacional

Hechos destacados

- El gobierno de Kast decidió retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo que generó una fuerte controversia con la oposición y sectores diplomáticos³¹.
- El gobierno profundizó las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad pública, inversiones y minerales críticos, mientras mantuvo un enfoque pragmático con China, dejando en pausa el proyecto del cable submarino chino³².
- En medio de la guerra con Irán, Chile realizó un realineamiento con Estados Unidos y las potencias occidentales, con gestos de apoyo a la política exterior de Donald Trump³³.
- Chile se alinea con el Estado de Israel, aunque con tensiones por la escasa tolerancia de la ciudadanía chilena a las injerencias de Tel Aviv y sus ataques en Palestina, así como por episodios de captura de ciudadanos chilenos por fuerzas militares israelíes³⁴.
- El presidente Kast realizó su primer viaje de Estado a Argentina para reunirse con Javier Milei, donde anunciaron una hoja de ruta bilateral en seguridad, migración, comercio y minería³⁵.
- En mayo-junio de 2026, la Cancillería impulsó el “Compromiso de Santiago” contra el crimen organizado transnacional, con reuniones regionales de alto nivel para enfrentar migración irregular y narcotráfico³⁶.

31 El País, 24 de marzo del 2026 , Radio UChile, 6 de mayo del 2026.

32 La Tercera, 11 marzo de 2026

33 La Tercera, 28 de marzo del 2026.

34 Infodefensa, 1 de abril del 2026.; CNN, 18 de mayo del 2026.

35 Minrel, 06 de abril de 2026.

36 El País, 28 de mayo de 2026

Análisis

Política exterior con costo interno

Como pocas veces en nuestra historia, el contexto internacional y las decisiones de política exterior pasan a ser parte central de las preocupaciones de la política interna y con capacidad de incidir en el debate y en las elecciones. Temas como el alineamiento con Estados Unidos, China o el apoyo o crítica a regímenes autoritarios fueron parte importante de los debates de la campaña presidencial y han pasado a ser parte de la agenda del nuevo gobierno.

En enero el presidente electo nombró a Francisco Pérez Mackenna como ministro de Relaciones Exteriores, un hombre del mundo de los negocios y la gestión de grandes empresas con perfil similar al del ex canciller Alfredo Moreno, pero con una menor experiencia en el mundo gremial y político. A nuestro juicio la designación apunta fortalecer la posición de Chile en los mercados internacionales, con un sello de diplomacia económica antes que política aprovechando la experiencia del nuevo ministro en relaciones comerciales con China y otras grandes potencias occidentales. Alguien con el perfil de Francisco Pérez podría en teoría mantener cierto equilibrio en las relaciones con nuestros socios comerciales que se disputan la hegemonía mundial, tarea nada fácil considerando el deseo de alineamiento del Presidente Kast con la política de Donald Trump. Esto en sí mismo, configura una tensión de base con muchas implicancias.

El gobierno inicia su gestión en materia de política exterior con una compleja e inédita decisión. El retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, bajo el argumento de una evaluación técnica de viabilidad se ha convertido en un frente abierto de tensión interna pero también de desconcierto en el ámbito internacional. La candidatura fue recogida y promovida por Brasil y México cuyas diplomacias prestigiosas aseguran cubrir bien las tareas de su candidatura. Pese a los pronósticos pesimistas del gobierno, el trimestre cierra con señales de que la candidatura de Bachelet gana respaldos relevantes entre miembros del Consejo de Seguridad, lo que fortalece sus opciones reales de asumir el cargo. Esta perspectiva coloca al gobierno chileno en una posición muy incómoda y que disminuye su altura en política exterior. Un eventual triunfo de Bachelet sería leído como un gran triunfo para Chile y una enorme derrota para el gobierno, un contrasentido difícil de asumir y que de darse tendrá muchos costos.

La dimensión interna del episodio es más relevante que su lectura diplomática. Por un lado, ha intensificado la crispación con la oposición, que interpreta el retiro del apoyo como una extensión más de la lógica de antagonización descrita en este informe al convertir en blanco político a una figura asociada a la centroizquierda, incluso cuando se trata de una candidatura que, por tradición, había operado al margen de las disputas partidistas internas. Por otro lado, y quizás de forma más significativa, la medida ha generado incomodidad en sectores de la diplomacia profesional y entre excancilleres de distintos signos políticos, para quienes el apoyo a candidaturas internacionales de expresidentes chilenos ha sido históricamente tratado como política de Estado, no como una

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

prerrogativa del gobierno de turno. La ruptura de esa convención desgasta el prestigio de la política exterior chilena en el plano internacional y erosiona uno de los pocos consensos transversales que sobrevivían entre administraciones de distinto signo desde el retorno a la democracia.

El segundo frente con implicancias internas relevantes es el conflicto en torno al proyecto del cable submarino, que conecta a Chile con China y en cuyo desarrollo Estados Unidos y China intervienen de manera excluyente. El episodio es un ejemplo de improvisación en política exterior y dejó a Chile en una posición incómoda frente a ambos socios estratégicos, China y Estados Unidos. Ello es responsabilidad tanto del gobierno anterior como del entrante. Más allá del resultado específico de este proyecto, el episodio puso sobre la mesa una discusión de fondo sobre la necesidad de actualizar la institucionalidad chilena en materia de soberanía digital e infraestructura crítica. Este es un ámbito donde el país efectivamente arrastra un vacío regulatorio relevante frente a la creciente disputa geopolítica por cables submarinos, centros de datos y redes de telecomunicaciones.

Sin embargo, la forma en que se resuelva esa actualización institucional importa tanto como el hecho de resolverla. Existe el riesgo de que, presionado por su alineamiento con Washington, el gobierno adopte sin mayor deliberación un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras en la línea de los esquemas de "investment screening" que Estados Unidos promueve entre sus socios, diseñado a la medida de las exigencias de ese país, en lugar de construir un marco regulatorio que responda a las prioridades, capacidades institucionales y necesidades de inserción internacional propias de Chile. Un mecanismo importado bajo presión externa tiende a privilegiar los intereses estratégicos del país que lo exige, mientras que una institucionalidad diseñada a la medida de Chile podría equilibrar la necesidad de proteger infraestructura crítica con la conveniencia de mantener relaciones equilibradas con múltiples socios comerciales y tecnológicos, evitando profundizar el patrón de alineamiento unilateral que este informe ha documentado en otras áreas.

El realineamiento y sus consecuencias

Más allá de los casos Bachelet y el cable submarino, el trimestre consolidó un patrón más amplio de reposicionamiento internacional. Chile se alineó con Occidente antes incluso de que Kast asumiera formalmente, con la participación comprometida en el encuentro por la reapertura del estrecho de Ormuz liderado por Reino Unido, y profundizó esa orientación a lo largo del trimestre con gestos de respaldo a la política exterior de Donald Trump, participando antes asumir el mando en la reunión para la creación del Escudo de las Américas en la residencia de Trump en Florida, lo que consolidó la línea política de cercanía a la administración estadounidense, a pesar de haber jugado un papel menor en la reunión.

Estas decisiones generan una ganancia política inmediata en términos de confianza desde Washington, pero refuerzan la percepción de que esta Cancillería está perdiendo capacidad de conducir una política exterior autónoma. En un contexto que puede caracterizarse como una policrisis global -con conflictos simultáneos en Medio Oriente, tensión entre potencias y riesgo de escalada nuclear- el margen de error de una política exterior sin autonomía estratégica se vuelve

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

particularmente estrecho. La evidencia más concreta de esa asimetría llegó a inicios de junio, cuando Trump propuso un aumento arancelario del 12,5% a las importaciones chilenas: el alineamiento ideológico no produjo trato diferenciado favorable en materia comercial y el país está a la espera de las gestiones de la cancillería para hacer valer la "amistad". Algo similar antes pasó con Argentina en materia de aranceles.

Con todo, el Gobierno de Estados Unidos mediante su nuevo embajador Brandon Judd se ha mostrado menos beligerante y abierto a colaborar con esta nueva administración de afinidad ideológica. Se avanza en la cooperación en materia de lucha contra el crimen y control de fronteras, asimismo en la inversión en minerales críticos y tierras raras. El apoyo de Estados Unidos en el control de fronteras puede ser muy relevante, sobre todo en cooperación tecnológica para tales fines. Por otro lado, la inversión norteamericana en tierras raras conlleva un compromiso estratégico mayor, ya que China también tiene interés en dicho ámbito de negocio.

En abril, el gobierno formalizó la rehabilitación de Israel como socio estratégico, revirtiendo el distanciamiento de la administración de Boric. Este reposicionamiento enfrenta una resistencia persistente de la sociedad civil chilena que derivó en tensiones diplomáticas inéditas. La más grave fue la captura de ciudadanos chilenos integrantes de misiones humanitarias por fuerzas militares israelíes. El episodio de mayor connotación ocurrió a fines de mayo, cuando se viralizaron registros de tratos denigrantes contra los activistas detenidos. La respuesta diplomática llegó tarde y fue recibida con desconfianza ciudadana y por la oposición, revelando la incomodidad de una postura oficial que no logra conciliar el alineamiento con Tel Aviv y la sensibilidad de la opinión pública chilena respecto al conflicto en Palestina. La movilización de la oposición contra el embajador en Israel designado por Kast, Gabriel Zaliasnik por sus vínculos con Luis Hermosilla, dejan un flanco abierto para el gobierno en su relación con Israel que será una constante fuente de tensión.

Gobernanza regional: promesas sin arquitectura política

En América Latina, Kast construyó un relato de afinidad ideológica con Javier Milei, materializado en el viaje de Estado a Argentina y la hoja de ruta bilateral en seguridad, migración, comercio y minería. Existe potencial real en proyectos conjuntos en minería, energía y conectividad portuaria, pero su materialización requiere institucionalidad y continuidad que la afinidad entre líderes no garantiza. La integración regional más duradera se construye desde proyectos concretos, no desde convergencias ideológicas. La vinculación con Milei expuso además al gobierno a una prueba incómoda en razón de declaraciones de un vicealmirante argentino que reclamó soberanía sobre territorio magallánico chileno y que no recibieron respuesta oportuna.

El "Compromiso de Santiago" contra el crimen organizado transnacional, impulsado por la Cancillería en mayo y junio, apunta en la dirección correcta y es una buena noticia. El narcotráfico opera con recursos que superan a los de varios Estados de la región, lo que hace de la cooperación internacional una condición necesaria para enfrentarlo. A esta reunión fueron convocados cancilleres y ministros de seguridad de países fronterizos pero también cuyos gobiernos son ideológicamente más afines al gobierno chileno, como Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú. El

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

esfuerzo debe ir más allá y convocar actores regionales de mayor influencia como Brasil, Colombia y Venezuela y procurar una estructura de operación pragmática sobre la materia y que sea transversal al signo político de los gobiernos de turno.

Sin embargo, para fortalecer la cooperación en la materia los obstáculos son de magnitud y Bolivia, Perú y Venezuela son actores clave en la solución de la doble crisis seguridad-migración, y los tres exhiben condiciones de inestabilidad que limitan severamente la cooperación. El gobierno boliviano de Rodrigo Paz enfrenta la oposición territorial de Evo Morales, que opera como un Estado paralelo de facto y cuya salida no se ve cerca. En Perú, la estrechez con la que se está definiendo la elección presidencial entre Sánchez y Fujimori, anuncia un gobierno muy polarizado e inestable con una permanencia en el poder históricamente incierta. Venezuela, bajo el régimen post-chavista de Delcy Rodríguez, ofrece perspectivas de cooperación prácticamente especulativas. El gobierno retomó contactos con La Paz y Caracas entre marzo y abril para restablecer funciones diplomáticas mínimas, pero el desafío estructural supera los instrumentos disponibles.

El resultado del trimestre en política exterior es un doble estancamiento. El realineamiento con Estados Unidos e Israel redujo el margen de maniobra de Chile en un escenario donde China sigue siendo un socio estratégico insoslayable. La alternativa no es el alineamiento con Beijing, más bien un no alineamiento activo, que privilegie la independencia estratégica, la soberanía nacional y la cooperación horizontal en el ámbito internacional.

Al mismo tiempo, la incapacidad estructural de generar gobernanza regional efectiva impide traducir las promesas de campaña en políticas realizables. Las causas de la doble crisis seguridad-migración se ubican en gran medida fuera de las fronteras nacionales, y ninguna retórica de orden interno puede sustituir la institucionalidad diplomática que se requiere para enfrentarlas.

Contraste Global

El primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast ofrece un cuadro de contradicciones que este informe ha documentado en detalle. Un gobierno que llegó al poder con un mandato claro de transformación y con una mayoría parlamentaria suficiente para comenzar a ejecutarlo, exhibe al cabo de cien días una capacidad de gobernanza más frágil de lo que sus condiciones iniciales prometían. La distancia entre el relato y la gestión es el rasgo característico del período. Un problema que estuvo igualmente presente en la administración de Boric y que Kast no ha podido superar.

Gobernanza

La gobernanza política del trimestre estuvo marcada por la improvisación en el diseño del gabinete, la polarización como sustituto del diálogo y una estrategia legislativa que privilegió la rapidez del resultado sobre la sostenibilidad de lo aprobado. El gobierno logró aprobar su proyecto central en la Cámara, pero al costo de profundizar la fractura con una oposición que, aunque carente de agenda propia y coordinación política sólida, dispone de capacidad de bloqueo real en el Senado. La salida de dos ministras en menos de cien días revela un problema estructural de diseño en el que los roles, las competencias y las cadenas de mando no estaban correctamente definidos desde el inicio. Las críticas al “segundo piso” de asesores se mantienen y no hay claridad aún si lograrán o no interferir sobre el criterio del Ministro del Interior y su capacidad de ordenar la agenda.

La gobernanza económica presenta un déficit aún más preocupante. El gobierno heredó indicadores macroeconómicos auspiciosos y los deterioró en el primer trimestre: contracción del PIB, desempleo en máximos de cinco años, inflación impulsada por decisiones propias. El Plan de Reconstrucción Nacional, instrumento central de la agenda económica, descansa sobre proyecciones de crecimiento que el Consejo Fiscal Autónomo califica de inciertas y genera déficits fiscales proyectados al menos hasta 2031. Un gobierno que llegó prometiendo orden fiscal y crecimiento cierra su primer trimestre con peores números que la administración a la que responsabiliza del desastre.

La administración ha demostrado limitada capacidad de anticipación estratégica. Los episodios del trimestre como el recorte presupuestario a las policías revertido en días, la ausencia de un plan de seguridad al momento de asumir, la tardía respuesta ante los incidentes con ciudadanos chilenos en Gaza, sugieren un gobierno que reacciona a la coyuntura antes que conducirla. La narrativa de emergencia, eficaz en campaña, se está convirtiendo en un obstáculo para la planificación puesto que un gobierno que declara permanentemente la crisis tiene dificultades para proyectar un horizonte de normalidad desde el cual construir políticas de mediano plazo. La ausencia del litio en la Cuenta Pública es el síntoma más elocuente de esta limitación donde el principal activo

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

estratégico de Chile para las próximas décadas no forma parte de la visión de desarrollo del gobierno.

Margen de mejora

El trimestre deja, con todo, espacios reales para la corrección. El cambio de gabinete mostró que el gobierno tiene capacidad de reacción ante errores de diseño y prefiere asumir rápido los costos de decisiones duras, aunque aún no ha demostrado que esa reacción produzca resultados deseados. La agenda legislativa de seguridad anunciada en la Cuenta Pública con fuerzas de tarea, intervención barrial intensiva y ampliación de facultades policiales, ofrece un marco más coherente que el del inicio del trimestre, siempre que su concreción no quede subordinada al trámite parlamentario sin una estrategia de negociación definida. En economía, existe consenso transversal en torno a tres objetivos como seguridad, crecimiento y reducción del déficit, que el gobierno pudo haber aprovechado para construir un acuerdo nacional amplio. Ese camino sigue abierto, aunque el capital político para transitarlo se ha reducido. En política exterior la independencia estratégica frente a Washington y Beijing desde los intereses permanentes del país es una alternativa viable que no requiere ruptura con ninguna potencia, solo claridad de propósito y un fortalecimiento institucional para dar garantías a nuestros socios.

Riesgos

Los riesgos del segundo trimestre son de distinta naturaleza pero convergen en una misma vulnerabilidad: la fragilidad de la base de legitimidad sobre la que el gobierno intenta sostener una agenda de transformación acelerada. El primero es fiscal: si el crecimiento proyectado no se materializa -riesgo real dado el contexto internacional- el déficit se prolongará más allá de 2031 sin mecanismos de corrección previstos, comprometiendo la estabilidad macroeconómica que Chile ha construido durante décadas. El segundo es político: la consolidación del bloqueo mutuo entre oficialismo y oposición como modo normal de funcionamiento del sistema deteriora no solo al gobierno sino la legitimidad del Congreso, los partidos y el propio mecanismo democrático. El tercero es social: las medidas que transfieren costos a los hogares más vulnerables como la eliminación del Mepco los cobros del CAE y eventuales recortes al gasto social, acumulan tensión que puede derivar en conflicto de mayor envergadura si no se identifican válvulas de alivio. El cuarto es internacional: el realineamiento con potencias cuya política exterior es impredecible con Estados Unidos bajo Trump e Israel en Medio Oriente, expone a Chile a ser arrastrado por dinámicas que exceden su control. Por otra parte, en la medida que Bachelet consigue más apoyos, la reputación del gobierno en materia exterior se deteriora. En política vecinal la situación de Bolivia y Perú requiere una estrategia nacional preventiva frente a posibles escenarios de inestabilidad durable que puedan entorpecer los objetivos nacionales.

Los 100 primeros días del Gobierno de Kast

El segundo trimestre dirá si el gobierno de Kast tiene capacidad de aprender de un inicio difícil y construir la gobernabilidad que su mandato requiere, o si la narrativa de emergencia seguirá siendo su libreto.

Equipo de redacción y análisis:

- Tomás Arias: Cientista Político, Universidad Diego Portales. Investigador Analista de Chile 21.
- Juan Pablo Cruz: Cientista Político, Universidad de Chile. Investigador Analista de Chile 21.
- Luis Eduardo Escobar. Economista, Máster en economía Universidad de Maryland. Director de Chile 21.
- Daniel Grimaldi. Administrador público. Doctor en Estudios Políticos, EHESS, Francia. Director ejecutivo de Chile 21.
- Natalia Silva. Socióloga, Máster en Seguridad y Defensa ANEPE, doctorante en sociología de las policías, UNSAM. Experta en Seguridad de Chile 21.
- Juanita González: Diseñadora editorial y webmaster de Chile 21.

Contraste Global es una publicación trimestral de la Fundación Chile 21. Para consultas sobre este informe, solicitudes de entrevista a sus autores o información sobre suscripciones institucionales, escribir a direccionejecutiva@chile21.cl. Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Instagram / [fundacionchile21](#)

Facebook / [fundacionchile21](#)

X (Twitter) / [@chile_21](#)

Youtube / [@fundacionchile21](#)

www.chile21.cl | San Sebastián 2807, of. 416, Las Condes.